

Editorial

De espaldas a la realidad

La novedad que el segundo año de gobierno del presidente Flores anuncia a la población salvadoreña para enfrentar su crítica situación económica, que es lo que más preocupa a la inmensa mayor parte de la misma, mucho más incluso que la inseguridad, es que "Estados Unidos, por primera vez, ha expresado su intención de firmar un tratado de libre comercio". Este tratado tendría todos los elementos necesarios para superar los obstáculos que impiden el desarrollo sostenible y el bienestar general. El gobierno actual parece creer ciegamente en estos tratados y en su potencial para crear los miles de empleos que la sociedad exige en estos momentos. Su confianza en el éxito es absoluta, pero no por eso menos ingenua: "Estamos destinados al triunfo" es la gran conclusión a la que llega el presidente Flores después de dos años de gobierno. Es como si alguna fuerza poderosa empujara el proceso de manera inexorable hacia su meta lógica, desvalorizando con ello la acción política. Es el mismo determinismo del cual adolecía el marxismo, también deudor del liberalismo clásico, y por el cual fue muy criticado.

Ahora bien, ahí donde el tercer gobierno de ARENA encuentra respaldo para su optimismo, también se pueden encontrar razones objetivas para cuestionar la dirección hacia la cual pretende llevar a la sociedad salvadoreña. El gobierno actual difunde el optimismo a partir de unas pocas convicciones ideológicas simples, mal asimiladas y sin respaldo sólido en la realidad nacional y centroamericana. Sin embargo, considera que esas convicciones están dotadas de poder suficiente como para aglutinar a aquellas fuerzas sociales que determinan la dirección y el contenido del proceso salvadoreño. Con una unidad semejante, no duda en alcanzar las metas que se ha propuesto. La cuestión es que en dos años, exceptuando a los altos funcionarios gubernamentales, a la gran empresa privada organizada y a la gran prensa, en la cual ambos encuentran eco, nadie más comparte esta visión optimista acerca del presente, ni acerca del futuro inmediato. El optimismo es cosa de minorías, y no porque haya faltado quien lo predique, sino porque el poder de la

dura realidad socava de manera constante sus fundamentos. Al verse expuesto de esta manera, el gobierno reacciona negando esa realidad.

1. La negación como mecanismo de defensa

Los dos primeros años del tercer gobierno de ARENA se caracterizan por el énfasis en negar o desconocer todo aquello que lo cuestiona o contradice. Así, la negación y el desconocimiento son utilizados como mecanismo de defensa para conservar intacto el curso gubernamental y, por lo tanto, de los asuntos públicos. En el psicoanálisis, la negación es uno de los mecanismos utilizados por el yo para defenderse de todo aquello que percibe como desestabilizador o amenazador. El yo intenta protegerse de los estímulos que lo obligan a abandonar la comodidad de la rutina o le causan dolor o ansiedad, negando la existencia de la realidad de la cual proviene ese estímulo desagradable o inquietante. El yo trata a toda costa de evitar cualquier trauma que ponga en riesgo su seguridad. Salvando las diferencias obligadas, se puede afirmar que este es el mecanismo de defensa preferido por el tercer gobierno de ARENA, el cual percibe en la diferencia de opinión y en el desacuerdo una amenaza grave. El recurso a mecanismos de defensa ante la presencia de situaciones desestabilizadoras es normal. Lo que llama la atención es que un poder ejecutivo que se dice democrático se perciba gravemente amenazado por la diferencia de opinión y el desacuerdo, porque el debate que éstas suscitan es un elemento implícito en cualquier democracia. La actitud de este poder ejecutivo ante los desafíos democráticos sólo es comprensible desde su propia debilidad e inseguridad.

La verdad es que hay razones de sobra para que el poder ejecutivo se sienta inseguro y débil. Está comprobado que la política económica que ARENA viene impulsando desde 1989 no ha producido aún los resultados esperados y ha colocado a sus sucesivos gobiernos al borde de la crisis cada cierto tiempo. Los síntomas traumáticos, si es permitido tomar prestado este concepto del psicoanálisis, son una economía que no crece al ritmo previsto, a partir de las exportaciones; una inversión extranjera, necesaria para estimular la producción y generar empleo, que no fluye en la cantidad deseada, y un déficit fiscal y una deuda pública que aumentan, al punto de volver insostenible la situación. Antes de sustituir el colón por el dólar, el gobierno no aceptaba la ausencia de resultados en su política económica; en el mejor de los casos, atribuía esta carencia a circunstancias pasajeras fuera de su control. No obstante, todos los que señalaban la existencia de dificultades eran descalificados o incluso ignorados.

Las dificultades experimentadas por la política económica y social sólo fueron reconocidas, y eso de una manera superficial, cuando el poder ejecutivo intentó justificar la sustitución de una moneda por otra, alegando que la economía se encontraba "entrapada". Pero nunca se atrevió a explicar dón-

de radicaba el problema, ni mucho menos tuvo valor para analizar sus causas, ni para señalar a sus responsables. Es cierto que el gobierno actual heredó una economía ya en crisis, pero también es cierto que contaba con ciertas ventajas políticas para impulsar un cambio, que no supo o no quiso hacer. Es paradójico que después de tres gobiernos, ninguno de ellos se haya atrevido a rectificar unas políticas de ajuste estructural cuyas metas han demostrado ser no sólo cuestionables, sino que también inalcanzables. Tal es el caso, por ejemplo, del déficit fiscal, el cual, a estas alturas, ya debiera estar bajo control. En lugar de ello, muestra una tendencia a aumentar de forma constante. Otro tanto se puede decir de la reactivación del agro y de la micro, la pequeña y la mediana empresa, del combate contra la corrupción y de la reducción de la pobreza, promesas todas ellas repetidas por un gobierno tras otro, pero todavía sin cumplir. Es indudable que los terremotos son un punto de inflexión para el gobierno y el país entero, pero aun antes de que éstos ocurrieran, ya era evidente que el programa propuesto por el presidente Flores no estaba siendo ejecutado, excepto la eliminación del riesgo de una posible devaluación por la imposición del dólar como moneda nacional. Pese a ello, los terremotos no supusieron, tal como era de esperar, un ajuste de la política a la nueva realidad creada: unos 200 mil pobres adicionales y una pérdida del 12 por ciento del producto interno bruto. Lo que para el poder ejecutivo es muestra de solidez, desde la realidad misma es una torpeza, explicable sólo por el dogmatismo predominante. Al ser insostenible esta postura, a aquél no le queda más que colocarse a la defensiva.

Los dos primeros años del tercer gobierno de ARENA se caracterizan por el énfasis en negar o desconocer todo aquello que lo cuestiona o contradice.

Aun así, en estos dos años, la única promesa de importancia cumplida por el poder ejecutivo, la sustitución del colón por el dólar, fue negada por éste de una manera insistente. La ley misma que la decreta lleva el contradictorio título de "integración monetaria", como si las dos monedas estuvieran destinadas a coexistir de manera permanente. Mientras los bancos multilaterales, la asociación de la banca salvadoreña y los intelectuales de la derecha interpretan la medida como un proceso para reemplazar una moneda por otra, el poder ejecutivo se empeña en negar la especie. Para contrarrestar el rechazo mayoritario y evidente de esta medida, el Banco Central de Reserva preguntó a la opinión pública qué moneda usaba en sus operaciones. El resultado fue el previsto, pero el banco aclaró a sus críticos que su interés no era averiguar si la gente deseaba utilizar el dólar, sino si en la práctica lo estaba usando. De nuevo, el poder ejecutivo presenta hechos consumados, sin prestar atención a la voluntad expresa de la población.

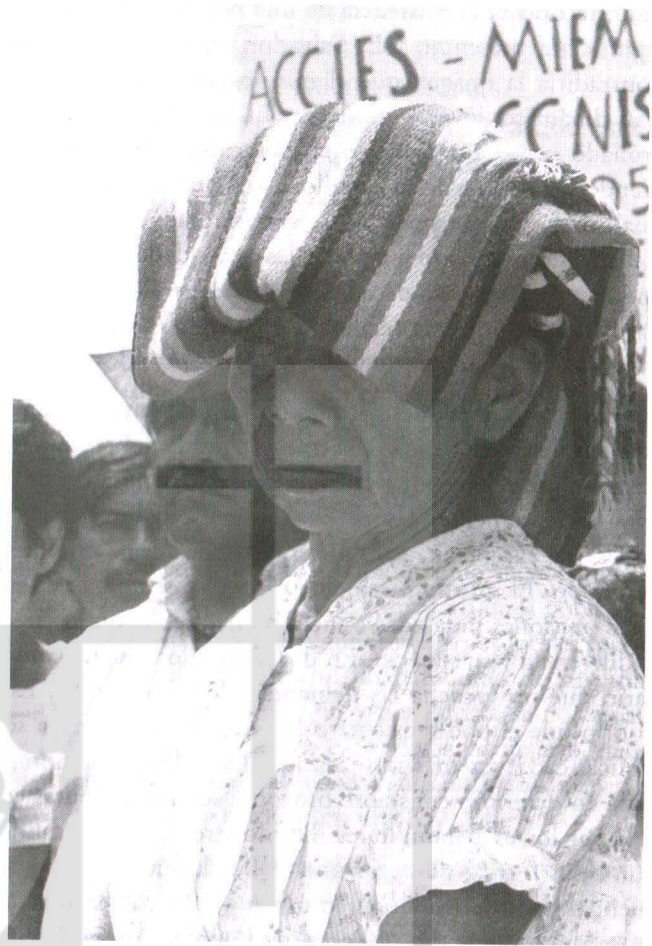
Idéntico mecanismo utiliza para enfrentar el déficit fiscal y el nivel de la deuda pública. Aunque estos temas han sido motivo de preocupación desde hace algún tiempo, los terremotos pusieron de relieve la poca capacidad de endeudamiento con la que cuenta El Salvador, en la actualidad. Los funcionarios gubernamentales sostienen, en cambio, que, gracias a su buena gestión fiscal, el país aún goza de credibilidad en el mundo de las finanzas internacionales y, por consiguiente, todavía tiene capacidad para contraer nuevas deudas. Según esta versión, la reconstrucción no tendrá problemas para encontrar el financiamiento necesario. De esta manera, el gobierno niega que la deuda se esté aproximando al límite racional. Si hubiera otro desastre —o, para el caso, si el país tuviera que invertir en los enormes proyectos de infraestructura que el gobierno de México está proponiendo—, El Salvador no podría endeudarse más, ni posee tampoco los instrumentos macroeconómicos indispensables para enfrentar esa nueva crisis, porque al adoptar el dólar como moneda nacional, renunció a tener política monetaria propia. A ello se agrega el agobiante problema del déficit fiscal creciente. No obstante los esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal, los gobiernos de ARENA no han podido aumentar la carga tributaria. Ante la crisis que se cierne amenazadora sobre las finanzas públicas, el poder ejecutivo niega su existencia y niega, además, que vaya a subir los impuestos.

El gobierno y sus socios se vanaglorian de la estabilidad macroeconómica, la cual atribuyen además a su buena gestión, en particular al Banco Central de Reserva, pero no mencionan que aquélla es posible por la enorme cantidad de dinero que los emigrantes envían a sus familiares residentes aún en El Salvador. El presidente Flores incluso se atribuye como un logro de sus dos años de gobierno el aumento de esa cantidad de dinero. En realidad, ello no depende de su política —al menos no en sentido positivo—, pero sí en el negativo, en cuanto que la política económica salvadoreña obliga a emigrar al norte a una cantidad creciente de población. Simultáneamente, Flores desconoce el fracaso de esa misma política, desde la perspectiva de la economía familiar. Al no encontrar oportunidades de empleo, ni cómo satisfacer sus necesidades más elementales, al no ver futuro, la población —el 20 por ciento de la que en la actualidad reside en El Salvador— busca en el norte lo que le es negado en su propio país, obligándola así a romper con su estructura familiar y con sus formas tradicionales de vida. Pese a ello, el enfoque gubernamental de este fenómeno masivo y preocupante es planteado en términos sólo económicos. Aquellos que han triunfado en el norte, porque han hecho dinero, son presentados como “símbolos de éxito personal y solidaridad”. Esto último, por el dinero que envían a El Salvador. El vicepresidente y otros funcionarios salvadoreños buscan entre estos salvadoreños exitosos el dinero que necesitan para financiar la vivienda permanente, en vez de o además de buscarlo entre aquellos que más se han beneficiado con su política económica, en El Salvador mismo. No deja de ser paradójico que el fracaso del modelo económico

de ARENA sea el que permita a la economía nacional mantenerse a flote. Esta paradoja, sin embargo, tiene su correspondiente negación en la exaltación de la disciplina y laboriosidad de la población salvadoreña, cosa que, por otro lado, no es remunerada de acuerdo a estas cualidades. Hay, pues, una doble negación: la primera opera de cara a la realidad de los salvadoreños en el exterior y la otra de cara al interior.

En el discurso del segundo año de gobierno del presidente Flores, los

pobres están sorprendentemente ausentes. La palabra pobreza ni siquiera es mencionada. Pareciera que ésta no existiera en el país y, si la hubiera, sería irrelevante. Cuando, en realidad, los terremotos, según los estudios de la derecha misma, habrían aumentado su número de forma significativa. Tal vez no fueron incluidos en el discurso para no recordar una realidad grave a una población ya de por sí agobiada por los retos que le plantea sobrevivir en un país que, además de pobre, es inseguro; tal vez silenciaron su existencia para no ahuyentar la inversión extranjera. La lógica gubernamental de estas ausencias sería que recordar los problemas desanima. Por consiguiente, de lo que se trataría es de animar, promoviendo pensamientos positivos y optimismo. Los pobres y su pobreza representan algo tan problemático que es mejor no mencionarlos. Es la misma actitud de olvido ante las violaciones masivas de los derechos humanos. La derecha cree que el olvido la ayudará a resolver los graves problemas nacionales, creados en buena parte por su irresponsabilidad y su menosprecio del bienestar general, pero con ello sólo empeora las cosas, porque pospone las soluciones, volviéndolas más complejas. Por otro



lado, reconocer la existencia de una población en su inmensa mayoría pobre, significaría presentar a El Salvador como un país subdesarrollado, lo cual contradiría la imagen que el mismo gobierno se ha fabricado de dirigir un país dinámico, joven y moderno. El Salvador no sería tanto un país subdesarrollado como emergente o en desarrollo. Por la misma razón se niega, haciendo gala de un falso orgullo, a solicitar el perdón de su deuda externa, lo cual, dicho sea de paso, no le vendría nada mal para liberar un dinero que debería ser destinado a atender las necesidades ingentes creadas por los terremotos y por muchas décadas de subdesarrollo. El gobierno salvadoreño busca distinguirse de sus vecinos, los cuales al no poder con las obligaciones de la deuda, habrían pedido y conseguido su condonación.

Las reivindicaciones sociales de los diferentes sectores populares como las huelgas del seguro social del primer año de gobierno o los repetidos reclamos de indemnización por parte de los ex paramilitares de la Fuerza Armada o, más recientemente, las protestas de los damnificados por los terremotos, todas sin excepción, son enfrentadas de forma similar: la indiferencia o la represión. El mismo presidente Flores acostumbra ver en los reclamos populares presiones indebidas e incluso chantajes, con lo cual cree que justifica su indiferencia y su silencio. En dos años, Flores se ha convertido en un mandatario que no escucha las demandas de la población. Esta debe conformarse con lo que el poder ejecutivo le ofrece o arriesgarse a ser reprimida por una policía cada vez más militarizada. La indiferencia ante unas condiciones de vida en deterioro constante provoca acciones violentas como las protagonizadas por los ex paramilitares. La indiferencia, la descalificación y la represión son otras formas de negar una realidad, que clama por una respuesta pronta y eficaz. Con esta actitud, lo único que el gobierno actual está consiguiendo es profundizar la desconfianza de la población en las instituciones públicas, debido a que éstas no responden a sus necesidades fundamentales, expresadas con claridad desde hace varios años. A esto se debe que la mayoría no vea los acuerdos de paz con entusiasmo o los considere agotados, a que acuse al gobierno no sólo de incapaz, sino también de agravar los problemas y, por lo tanto, no comparta su falso optimismo. Ciertamente, los acuerdos de paz no tenían como objetivo primordial la transformación de la estructura social, pero crearon expectativas en la población, la cual creyó que de ellos dependía su bienestar futuro. Al constatar con el paso del tiempo que su situación no mejora, responsabilizan al gobierno por su mal desempeño e incapacidad. La persistencia e incluso el empeoramiento de las condiciones económicas y la inseguridad generalizada son la constatación de que el bienestar está lejos. La indiferencia ante la problemática social tiene su correspondencia en un profundo sentimiento de abandono por parte de la mayoría más necesitada y vulnerable del país.

En el discurso del segundo año de gobierno del presidente Flores, los pobres están sorprendentemente ausentes. La palabra pobreza ni siquiera es mencionada. Pareciera que ésta no existiera en el país y, si la hubiera, sería irrelevante.

Los que primero se alejan de las instituciones estatales, porque son los que perciben de manera inmediata su incapacidad, son los más pobres. Sin embargo, en los últimos años, el sentimiento de abandono se ha ido apoderando también de las clases medias. Cada vez más ciudadanos están convencidos de que las instituciones políticas no dan más de sí, porque han comprobado que ellas no modifican sus condiciones de vida. Por lo tanto, la reacción normal es el desinterés en ellas. Lo más seguro es que esta percepción negativa no cambie con un gobierno nuevo; cualquiera que llegue al poder, con independencia de su ideología, será percibido como incompetente. Sólo cambios palpables en las condiciones de vida de la mayoría de la población podrán modificar esta percepción. Sin embargo, algunos gobiernos locales son la excepción, por sus esfuerzos por relacionarse con los habitantes de su jurisdicción, por abrirles espacios para la participación y por esforzarse por resolver sus problemas. Ahora bien, el futuro de esta experiencia es incierto, dada la diversidad de estos gobiernos y su vulnerabilidad a los conflictos locales, a las presiones del gobierno central y al partidismo político.

Si las elecciones de los años 1999 y 2000 en algún momento se propusieron revitalizar el sistema político, han conseguido el efecto contrario. En la medida en que las elecciones despiertan en la población expectativas que luego no son satisfechas, alimentan la percepción de que las instituciones estatales, los partidos, los políticos y el sistema mismo son inútiles, y generan una sensación malsana de abandono. Elección tras elección, esa percepción se ha ido generalizando hasta alcanzar a las clases medias. El desencanto y la frustración explican la decisión de una mayoría creciente que se niega sistemáticamente a acudir a las urnas. En las últimas elecciones, los gobernantes han sido elegidos por menos de la tercera parte de la población en edad de votar y ninguno de los elegidos cuenta con un apoyo superior al 20 por ciento. La población no vota porque no espera nada de las elecciones; no pide cuentas a los gobernantes, porque no se la dan y, en consecuencia, desencantada con su país y su democracia, opta por abandonarlo. No obstante, las elecciones y sus resultados son reconocidos como válidos por la mayoría, pero carecen de legitimidad, porque no reflejan el sentido de sus intereses y aspiraciones. Esta especie de "desencanto democrático" hace que las elecciones, en lugar de fortalecer el sistema, lo debiliten, puesto que el orden político es establecido por una minoría cada vez más reducida.

Este panorama sombrío contrasta con la valoración optimista que hacen los funcionarios gubernamentales y quienes se dedican a la política. En lugar de avanzar en la consolidación de las instituciones estatales, en la construcción de un gobierno orientado hacia el bien general y en credibilidad, tal como correspondería a un proceso que de verdad fuera democrático, El Salvador retrocede, al mismo tiempo que sostiene sin inmutarse que la democratización es una realidad. El poco aprecio que la ciudadanía tiene por la Asamblea Legislativa es un caso extremo. Mientras el discurso oficial la considera como un elemento esencial de la democracia, el poder ejecutivo no tiene interés en reconocerle el lugar que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Para ARENA y su poder ejecutivo, pero con toda probabilidad para cualquiera de los otros partidos políticos, la oposición no es tanto un adversario con el cual se debe discutir y negociar, sino una amenaza, que debe ser neutralizada, despojándola así de su potencial para promover la democracia, al mismo tiempo que acentúa el carácter absolutista de aquéllos. La oposición legislativa es vista por el poder ejecutivo como una amenaza casi imposible de manejar. No obstante el énfasis del presidente Flores, al comienzo de su mandato, en combatir el presidencialismo predominante, heredado de los gobiernos anteriores, el suyo está resultando ser más presidencialista de lo acostumbrado. En menos tiempo del que se pudiera esperar y ante los desafíos de la realidad, a Flores no le ha quedado más alternativa que aferrarse al presidencialismo, aun a costa de menoscabar las competencias de las otras instituciones estatales, a las cuales ha debilitado de manera sistemática.

Esto que pareciera inevitable en el país, se explica porque la voracidad del capitalismo salvadoreño no deja otra opción al gobernante. El temor a una Asamblea Legislativa libre e independiente es lo que ha impedido ceder su presidencia al FMLN, tal como le correspondía, lo que genera miedos irracionales en ARENA ante la posibilidad de que aquél obtenga la mayoría de sus escaños en las próximas elecciones y lo que explica el desgaste sistemático al cual es sometida, hasta reducirla al ridículo y lo irrelevante. Por otro lado, los diputados de todos los partidos políticos se han prestado a las maniobras del poder ejecutivo. La conclusión que se impone es que la derecha salvadoreña es incompatible con la democracia, tal como ésta es entendida en occidente.

Algunos dirigentes del FMLN reaccionan muy molestos cuando la actuación de los partidos o de los diputados es criticada de modo general, sin hacer distinciones o introducir matices. La llamada de atención es objetiva, sin duda; pero apunta a una realidad que debiera cuestionar las prácticas vigentes de este partido y sus dirigentes, porque querría decir que la ciudadanía no percibe diferencia entre unos y otros. Las decisiones desatinadas, las pugnas intestinas por el poder, la formación de camarillas, la ausencia de un perfil ideológico definido, la resistencia a la renovación interna, la persistencia de formas de dirección tradicionales han llevado a que el partido que debiera ser la alternativa no haya podido encontrar su sitio como oposición política y como opción de poder. Al contra-

rio, lenta pero inexorablemente, el partido ha ido dilapidando su potencial para impulsar los cambios sociales prometidos. Se equivocan, además, quienes desde su interior creen que el apoyo recibido por la gran prensa de la derecha es suficiente como para convertirse en una opción de poder a ARENA.

Antes de negar el descrédito en que la vida política e institucional ha caído, refugiándose en un discurso abstracto, tal como lo acostumbra hacer el gobierno actual, el malestar de la ciudadanía debiera ser escuchado y su sentimiento de abandono debiera ser tomado como una advertencia seria so pena de despojar al sistema político de la poca legitimidad que le queda, hasta hacerlo caer. La mayoría de la población salvadoreña no ha visto aún las ventajas de la democracia. Su situación es tan desesperada que ya no se la puede convencer diciéndole que lo existente no es todo lo bueno que se desearía, pero que el pasado era peor.

2. La política de comunicación del silencio y de las imágenes

La Ministra de Planificación de Cristiani asegura —en su libro *El Salvador: un país en transición*— que cuando decidieron la serie de medidas de ajuste estructural con las cuales enfrentarían los problemas económicos y sociales del país, también determinaron imponerlas y ejecutarlas de manera rápida, es decir, sin consulta, ni debate con la sociedad —ni siquiera con sus representantes. “Las señales de la dirección a adoptar tendrían que ser muy claras”, eliminando de una buena vez cualquier “posibilidad de cambio o retroceso”. De lo contrario, no podrían ponerlas en marcha, debido a la oposición segura que surgiría. La imposición inconsulta, firme y rápida era la forma de anticiparse a la oposición. Ya sea por mera coincidencia o porque es el estilo de ARENA, el principio básico que rige al poder ejecutivo actual sigue siendo el mismo. Este se anticipa a la oposición, imponiendo sus decisiones más polémicas y cerrando de forma simultánea cualquier posibilidad para retroceder. Puede



que esta forma de gobernar sea muy eficiente e incluso técnicamente impecable, pero también es autoritaria. En cualquier caso, no es la mejor forma de impulsar el proceso de democratización pendiente en El Salvador y en el resto de Centroamérica. Ahora bien, este principio de gobierno se apoya en el mecanismo de defensa de negar la realidad. Se niega la existencia de decisiones o políticas, pero éstas se imponen de forma rápida y firme, cuando el poder ejecutivo lo cree conveniente.

Cuando la contradicción entre el discurso y la práctica se vuelve demasiado evidente, el gobierno reacciona proyectando una imagen falsa. Es una imagen que procura con bastante éxito, por lo menos hasta ahora, negar la negación, así como también la imposición autoritaria. Su método consiste en privilegiar los resultados esperados de las políticas gubernamentales, olvidándose de las realidades actuales e incluso de sus costos y viabilidad. Este mecanismo opera con un doble propósito. Hacia adentro y hacia el exterior, proyecta la imagen de un gobierno dinámico y moderno, preocupado por el crecimiento económico, el bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente, integrado por funcionarios jóvenes, formados en prestigiosas universidades extranjeras, tal vez algo inexpertos en el manejo de la cosa pública, pero capaces y honestos, al fin de cuentas. Por el otro lado, este juego de imágenes facilita impulsar el modelo neoliberal hasta sus últimas consecuencias, sin hacer concesiones de ninguna clase. A ello contribuye que sus políticas sean aceptadas sin provocar trastornos sociales perturbadores y que los gobiernos que buscan mercados para exportar capital y bienes encuentran fácil asociarse a un gobierno con las características antes mencionadas. Esta imagen sirve, además, para acallar a sus posibles críticos o hacerles más difícil su labor. El esfuerzo es secundado por una actividad diplomática, dedicada a la promoción de esa imagen de dinamismo, modernidad y decencia.

La construcción de la imagen no ha sido una empresa fácil, pero los dos años de esfuerzo han dado resultados satisfactorios. Es innegable que la opinión pública tiene una apreciación positiva, superior a la media, del presidente Flores y bastante más favorable que la de sus dos predecesores. El impulso decisivo provino de las circunstancias creadas por los terremotos. El logro más señalado por la opinión pública es la reconstrucción y la instancia mejor valorada por su desempeño durante la crisis, tal como fue planificado por los diseñadores de la publicidad oficial, es el Presidente de la República. En cambio, todas aquellas otras instancias que tuvieron que ejecutar los programas de emergencia fueron evaluadas en términos más bien negativos. El chasco se lo llevó el FMLN, que confiaba que su papel sería mucho mejor apreciado por la población. Después de la última elección de concejos municipales, el partido anunció con orgullo que gobernaría a más de la mitad de la población salvadoreña. Pero un año después, esa misma población no es capaz de atribuirle logros destacados a su administración municipal como para distinguirla de la de ARENA. La evaluación del comportamiento de las

municipalidades después de los terremotos es bastante negativa. Es un juicio que no distingue entre las municipalidades dirigidas por el FMLN y las dirigidas por ARENA. A los ojos de la mayoría de la gente, ni las unas ni las otras se distinguen por sus servicios a la comunidad. Aunque por razones distintas, este juicio debe haber sorprendido a los dirigentes de ambos partidos. En su afán por destacar la imagen del presidente Flores, la propaganda gubernamental menospreció a los gobiernos locales, en particular a los dirigidos por el FMLN, pero con ello perjudicó a todos estos gobiernos por igual. Tampoco es mera casualidad que el informe del segundo año de gobierno de Flores haya omitido los primeros seis meses, para concentrarse en el segundo semestre y en las secuelas de los terremotos, olvidando la problemática que lo habría llevado a la conclusión de que era necesario sustituir el colón por el dólar así como la supuesta evaluación interna que hizo de su gabinete de gobierno.

El gobierno de Flores confía en el juego de las imágenes, al cual le asigna unos recursos y unas energías que hubiesen estado mejor empleadas si hubiesen sido invertidas en proyectos sociales, medio ambientales y de mitigación de riesgo. En este esfuerzo, el poder ejecutivo no sólo ha invertido sumas cuantiosas de dinero, provenientes de los contribuyentes, sino que, además, ha contado con el apoyo incondicional de la gran prensa escrita, radial y televisiva, la cual así se ha apropiado, sin mayor crítica o distancia, del proyecto gubernamental, hipotecando su independencia. Parte de esta colaboración son el ensayo de las conferencias de prensa del presidente Flores con los periodistas mismos, las reuniones periódicas con los directores y editores de la gran prensa para discutir cómo enfocar las noticias y decidir qué difundir y qué silenciar, las instrucciones a los altos funcionarios gubernamentales por parte de Casa Presidencial sobre cómo responder a la prensa, la concesión de publicidad oficial a los medios dóciles y la restricción a los independientes —medida a la cual se suman las agencias de publicidad y la gran empresa privada—, e incluso llamadas de atención del propio presidente Flores y de otros altos funcionarios a los propietarios de aquellos medios de masas que difunden noticias que no son de su agrado.

Estos, aunque hacen gala de su compromiso con la verdad y de su vocación para investigar la noticia, muy rara vez cuestionan el discurso oficial, no buscan fuentes alternativas, ni verifican las que utilizan, tampoco van más allá de las declaraciones de los voceros oficiales. La agenda de la gran prensa no está motivada, por lo general, por el compromiso con la verdad, ni es un ejercicio pleno de libertad, sino que, más bien, responde a alguna razón particular de su propietario o su editor. Es así como la necesidad del poder ejecutivo de crear una imagen positiva y atractiva, que disimule sus contradicciones, está llevando a poner en grave peligro uno de los espacios más valiosos conquistados por los acuerdos de paz hace diez años. La libertad de expresión, información y prensa era tal vez una de las pocas posibilidades con potencial para democratizar una estructura social ya de por sí vertical y autoritaria. Con

todo, no se puede desconocer el éxito de la empresa. La imagen positiva de la cual el presidente Flores goza en el interior y sobre todo en el exterior ha contribuido a consolidar su posición, dificultando la tarea a la crítica.

Es demasiado arriesgado confiar ciegamente en un gobierno que utiliza de manera simultánea y complementaria la negación y la imagen que la oculta, que prefiere el silencio aquiescente a la discusión crítica para encontrar lo mejor para todos. Hacerlo, implicaría refugiarse en la virtualidad y la apariencia, en un contexto que plantea unos desafíos apremiantes y complejos. No se puede confiar en un gobierno cuyo presidente ni siquiera es capaz de informar con un mínimo de exactitud sobre su gestión. En efecto, en su discurso del 1 de junio, el presidente Flores asegura haber construido un total 225 mil viviendas después de los terremotos, pero si se suman todas las que el mismo discurso indica que se han construido, en ese período, resultan 255 mil; lo mismo sucede con los nuevos empleos que supuestamente crearán los tratados de libre comercio: el total dado por el presidente asciende a 75 mil, pero sumando los que el mismo discurso atribuye a cada tratado, resultan 95 mil. Las estadísticas oficiales son manejadas con igual ligereza, haciendo las promesas irreales. El presidente se comprometió a hacer pasar el analfabetismo del 17 al 12 por ciento —prescindiendo de la exactitud del dato inicial—, eso significaría una reducción del uno por ciento anual, algo sumamente difícil —puesto que su predecesor logró disminuirlo en 1.4 por ciento, en cinco años. El discurso confunde la capacidad gubernamental para construir viviendas con las viviendas temporales ya entregadas, lo cual equivale a identificar la vivienda temporal con la permanente. Cuando el discurso llega al capítulo de las exportaciones salvadoreñas, las imprecisiones son todavía más llamativas. Aquí el presidente Flores prometió que las exportaciones destinadas a Chile pasarán de 6 a 20 millones de dólares, pero, según el Banco Central de Reserva, aquéllas no llegan a un millón de dólares, en la actualidad; de la misma manera, en tres años, prometió exportar cien millones de dólares a Canadá, México y República Dominicana, respectivamente —todo ello acompañado de decenas de miles de nuevos empleos—, pero, según la misma fuente, El Salvador apenas exporta 16 millones de dólares a los dos primeros mercados y el tercero ni siquiera aparece en las estadísticas oficiales. Se podría aducir, en descargo del poder ejecutivo, que las cifras fueron confundidas o que la información de la cual se disponía no era la adecuada; pero, en un discurso cuyo propósito es informar a la nación de un año de gestión, no se pueden tolerar estas imprecisiones, las cuales hablan más de la irresponsabilidad y la superficialidad con la que se administran los asuntos públicos así como también del poco respeto que le merecen los diputados y la ciudadanía. La precisión pareciera haber sido sacrificada en aras de una inyección de optimismo.

El sacrificio de la realidad se puede mantener si aquellos que puedan abogar por ella son cooptados o silenciados. Por eso, la gran prensa suprime,

por regla general, las voces alternativas y, cuando les da espacio, las tergiversa; asimismo, prescinde de las fuentes y las estadísticas y hace caso omiso de las reglas mínimas de un periodismo objetivo. En un alarde de objetividad y modernidad, publica los resultados de encuestas de opinión pública, pero lo hace de tal manera que confunde al lector desprevenido o no iniciado. Los datos, sobre todo cuando reflejan alguna ambigüedad, son presentados de una forma tal que se les hace decir lo contrario, siempre en la línea marcada por el poder ejecutivo. Un gobierno como el actual no puede sino sentirse amenazado por la realidad y por aquellos que le dan voz. En estas circunstancias, dar voz a la realidad se vuelve una acción beligerante y amenazadora, porque ataca el punto más vulnerable del plan de gobierno y porque adquiere credibilidad con bastante facilidad y rapidez, puesto que es muy fácil constatar su veracidad empíricamente y porque recoge y expresa de manera inteligible los sentimientos y sobre todo las razones que una buena parte de la sociedad intuye.

Es demasiado arriesgado confiar ciegamente en un gobierno que utiliza de manera simultánea y complementaria la negación y la imagen que la oculta, que prefiere el silencio aquiescente a la discusión crítica para encontrar lo mejor para todos.

La buena imagen con la cual el tercer gobierno de ARENA inicia su tercer año contrasta con la crítica situación económica, la inestabilidad social y la inseguridad ciudadana generalizada. Más de la mitad de la población piensa que la situación económica ha empeorado, mientras que un tercio sostiene que no ha experimentado cambios. Peor aún, la medida más ponderada por el poder ejecutivo, la sustitución del colón por el dólar, sigue siendo rechazada por la mayoría. Los beneficios que le atribuye todavía no son percibidos por ésta como para compartir su entusiasmo y optimismo. En este sentido, el poder ejecutivo no se equivocó al negarse a discutir la medida y al imponerla de manera autoritaria. De todas las medidas propuestas, la sustitución de una moneda por otra —“la verdadera rehabilitación del país”, según palabras del propio presidente Flores— es la más audaz, pero es la menos necesaria. Se quiso eliminar el riesgo de una devaluación y estimular el descenso de las tasas de interés cuando el tipo de cambio se mantenía inalterado desde 1992 y éstas ya habían comenzado a disminuir por su cuenta, desde el segundo semestre del 2000. El optimismo con el cual el poder ejecutivo enfrenta el futuro tampoco es compartido por la mayoría de la población. La mitad piensa que El Salvador sigue igual y un cuarto que ha empeorado, mientras que sólo el resto considera que ha mejorado.

Correspondientemente, la inmensa mayor parte de la opinión pública exige un cambio de rumbo. La mayoría no cree que manteniendo la direc-

ción actual, su situación y la del país vayan a mejorar, sino que empeorarán o seguirán igual. Esta es la realidad que la política de comunicación del poder ejecutivo, con la connivencia de la gran prensa, trata de silenciar para que no interfiera con sus planes. Pero plegarse a ella es volverse cómplice. Dar voz a la realidad, desentrañar y exponer sus razones y exigir su transformación significa resistir el rumbo por donde, de una manera forzada, porque no parecen conocer otra, quieren llevar a la sociedad salvadoreña sus actuales dirigentes. Un gobierno que no ha sabido responder a los desafíos sociales más urgentes de la población es un mal gobierno. En estos dos años, el presidente Flores ha insistido tanto en la imagen que se ha olvidado de la realidad. Podría ser que la valoración de la población aumente en los próximos tres años que le quedan al gobierno actual, pero eso no significará que haya más o mejor empleo o más bienestar.

3. Un nuevo engaño para profundizar el neoliberalismo

La política de la negación y del silencio no siempre es exitosa. A veces la realidad se manifiesta con tal fuerza que supera las barreras levantadas para contenerla. Eso es lo ocurrido con el diagnóstico sobre el estado actual de El Salvador del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), un centro de estudios al cual el poder ejecutivo no podría acusar de utilizar datos erróneos, ni de manipularlos, ni tampoco de politizarlos —el argumento último en el argot político salvadoreño para descalificar una opinión no compartida. Contrario a lo que sostiene el poder ejecutivo, el INCAE no sólo reconoce la existencia de una pobreza preocupante, sino que la interpreta correctamente como uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo sostenible. La pobreza que el gobierno de Flores niega, pero que los especialistas del INCAE identifican como un problema clave para el futuro salvadoreño es el 11 por ciento de la población que vivirá menos de cuarenta años, el 22.2 por ciento de adultos analfabetos, el 34 por ciento que tiene acceso limitado al agua potable, el 20 por ciento que no dispone de sus desechos de forma adecuada, el 11 por ciento de niños desnutridos y la elevada concentración de la riqueza: mientras el 20 por ciento más rico de El Salvador acapara el 56.6 por ciento de su ingreso total, el 20 por ciento más pobre sólo percibe el 3.4 por ciento del mismo, equivalente a más de dieciséis veces menos —cuando lo “normal” es una diferencia no mayor que ocho. El 25.3 por ciento de la población salvadoreña que se encuentra en el quintil inferior vive con menos de un dólar al día. En suma, a lo largo de su historia, concluye el INCAE, El Salvador no ha sabido convertir la riqueza, excesivamente concentrada, en bienestar general.

La política económica y social de los gobiernos de ARENA es, en gran medida, la responsable directa no sólo de esa pobreza, sino de hacer de El Salvador un país cada vez más pobre, hasta el punto de llevar a los especialistas del INCAE a afirmar que mientras no se hagan avances sustanciales en su



reducción, cualquier política que se intente impulsar está condenada de antemano al fracaso. El subdesarrollo predominante es tan grave que las políticas se agotan aun antes de haber desplegado completamente todas sus potencialidades. Los terremotos han agravado esta realidad de subdesarrollo y pobreza. Sin modificaciones radicales en la estructura social, el modelo de mercado libre, en el cual el gobierno de Flores confía de manera absoluta, no ofrece ninguna solución a corto y mediano plazo; es más, su impacto en la realidad social es marginal. En consecuencia, para estos especialistas, El Salvador no camina hacia el desarrollo sostenible, tal como lo demuestra su bajo nivel de desarrollo humano. En segundo lugar, los proyectos sociales orientados a sacar de su pobreza a las clases populares son impostergables y, en la práctica, son condición *sine qua non* para el éxito de cualquier política futura, incluida la actual. El desarrollo de estos proyectos requiere de una intervención estatal decidida, pues el mercado no ofrece ninguna solución para ellos. La tercera conclusión es más discutible, pues en lugar de preguntarse por qué un modelo de desarrollo que prometía, entre otras cosas, disminuir la pobreza, arroja un resultado totalmente contrario. Más incomprensible aún, desde la perspectiva de las mayorías salvadoreñas, es que se pida una segunda oportunidad para el neoliberalismo, nada más que ahora en un contexto transformado por programas eficaces de desarrollo social. Los intelectuales de la derecha se muestran preocupados por las presiones ejercidas para descartar su modelo, en el cual ellos todavía siguen creyendo de una manera casi absoluta. Su tesis sostiene que la excesiva concentración de la riqueza y la extensión de la pobreza le han negado la oportunidad que merece para mostrar sus bondades. Corregidas ambas, el modelo tendría que ser exitoso.

Sin menospreciar la importancia que tendría en una sociedad como la salvadoreña redistribuir la mitad de la riqueza acumulada en el quintil superior en beneficio directo del inferior, a través de programas sociales de amplio alcance, la solución que ofrece la derecha ilustrada es la misma. Sus patrocinadores, sin embargo, no discuten cómo podría reducirse la pobreza de manera significativa al mismo tiempo que se aplica una política de claro corte neoliberal, fundamentada en un mercado sin restricciones. El gran capital y el gobierno salvadoreños están a favor de reducir al mínimo el papel del Estado en el desarrollo social, pero sin un Estado fuerte y decidido no será posible reducir a la mitad la diferencia que separa a los más ricos de los más pobres. Sorprende, pues, el empeñamiento en un modelo que ya demostró su incapacidad para entregar los resultados esperados. El centro de la política no puede constituirlo el mercado, ni la competitividad, ni la inversión extranjera como lo ha sido hasta ahora, sino los pobres y la redistribución de la riqueza, en orden a reducir a la mitad su concentración excesiva, como paso previo a cualquier otra decisión política.

La política económica y social de los gobiernos de ARENA es, en gran medida, la responsable directa no sólo de esa pobreza, sino de hacer de El Salvador un país cada vez más pobre, hasta el punto de llevar a los especialistas del INCAE a afirmar que mientras no se hagan avances sustanciales en su reducción, cualquier política que se intente impulsar está condenada de antemano al fracaso.

No obstante, el gobierno de Flores hace caso omiso del diagnóstico y del pronóstico de sus especialistas más solventes —y también del tratado de libre comercio con Estados Unidos, quizás porque ya se convenció de que éste no es viable a corto plazo— y se apresta a apostar por el llamado plan Puebla-Panamá como nuevo agente del desarrollo nacional. El plan es, sin duda, una gran oportunidad para desarrollar el istmo centroamericano, pero si el gobierno salvadoreño no presta atención a las advertencias de sus propios especialistas, lo único que conseguirá será más concentración de la riqueza, más pobres y más subdesarrollo humano. En consecuencia, para echarlo a andar, deberá forzar otra vez el rumbo del país, en una dirección contraria al bienestar de sus mayorías. Y, de nuevo, no podrá transformar la riqueza en bienestar general. Prescindiendo de otras consideraciones, la advertencia del INCAE es muy oportuna, porque los gobiernos intentan ejecutar el plan como si las condiciones sociales y económicas estuvieran ya dadas. Adicionalmente, el plan presenta otras limitaciones, que arrojan nuevas dudas sobre su verdadero propósito, siendo una de ellas el que los mexicanos

han desarrollado con bastante detalle lo que quieren hacer con el sureste de su país, una zona muy rica en recursos naturales, pero muy poco desarrollada y, por lo tanto, pobre y con problemas graves de identidad nacional y rebeldía, mientras que los centroamericanos no tienen más que ideas muy generales sobre cómo desarrollar su propia región. De ahí que pueda afirmarse que el plan posee mucho de Puebla y muy poco de Panamá. Tal vez porque los siete gobiernos del sur no tienen ideas o tal vez porque están esperando que otros, es decir, los mexicanos y los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo les digan qué es lo que deben hacer o porque simplemente han creído ver en él una oportunidad y se han sumado sin saber con exactitud hacia dónde quisieran dirigir a sus respectivos países.

A primera vista, el plan mexicano promete mucho. Los intelectuales de la derecha incluso han encontrado vinculaciones prehispánicas, en las cuales creen ver unos lazos de unidad histórica que garantizarían su éxito *a priori*. A algunos de ellos, el plan les ha recordado la Mesoamérica prehispánica e incluso maya, aunque, claro está, esto sólo es posible estirando y encogiando los conceptos, porque ni la primera llega tan al sur, ni comprende todo el istmo centroamericano, ni la segunda comienza tan al norte, ni llega tan al sur. El interés de México en el istmo les recordó la declaración franco-mexicana, hecha a comienzos de la guerra salvadoreña, pero se olvidan convenientemente del virulento rechazo del cual fue objeto, así como también desconocen las invasiones de los nahuats, la influencia mexicana en la independencia centroamericana y de la anexión al imperio de Iturbide. Así es la memoria de selectiva cuando pierde el principio de realidad, pero hay que disculpar estos deslices conceptuales de la derecha, causados por el exceso de entusiasmo que en ella despierta el actual gobierno de México, en el cual encuentran similitudes con el salvadoreño.

Dos hipótesis, no necesariamente excluyentes, pueden ayudar a descubrir las motivaciones del plan. México busca resolver el problema que le plantea el sureste de su territorio. El norte está bien integrado y consolidado con el tratado de libre comercio con Estados Unidos. El sureste es otra cosa. Necesita otras salidas y Centroamérica y Panamá conformarían el área ideal para desarrollar sus potencialidades. De esta manera, los centroamericanos vendríamos a ser ahora el patio trasero de los mexicanos, quienes ya están experimentando el impacto del libre comercio con la primera potencia militar del mundo. Los gobiernos centroamericanos, por su lado, aceptarían gustosos servir de patio trasero, porque no tendrían mejor alternativa para hacer crecer sus economías y crear el empleo que necesitan desesperadamente. No sería extraño que en sus cálculos entrara también la posibilidad de llegar a Estados Unidos vía México. La otra hipótesis es que Estados Unidos, ante la imposibilidad de firmar un tratado de libre comercio con el istmo a corto plazo, tanto por los obstáculos que encuentra en su propio gobierno como por los que plantean los mismos gobiernos centroamericanos, esté utilizando

a México como puente para disponer de Centroamérica de acuerdo a sus conveniencias. El intermediario mexicano le permitiría intervenir de manera indirecta, pero no por eso menos eficaz, para "corregir vicios y errores del pasado, modernizar nuestros aparatos productivos, superar viejos atavismos y encontrar fórmulas novedosas de desarrollo", según palabras del propio presidente mexicano.

Las generalidades que circulan sobre el plan no sólo incluyen aspectos económicos y comerciales, sino también la modernización y el fortalecimiento institucional de los estados centroamericanos, a través de asesorías en las áreas tributaria, judicial, industrial, energética, hidrocarburos, agua, transporte, emigración, mitigación de riesgos, etc. El tema aparece en la agenda del Banco Mundial para México y el Banco Interamericano de Desarrollo está dispuesto a financiar generosamente el plan, proporcionando unos cuatro mil millones de dólares, aunque los países centroamericanos deberán contribuir con aportes propios. En el caso de El Salvador, que no dispone de dinero para invertir en esta clase de proyectos, el aporte requerido tendría que salir de nuevos préstamos, en la medida en que esto sea posible, y de la venta de las últimas propiedades estatales. La agenda del Banco Mundial asigna a México el papel de hermano mayor, un papel que algunos saludan como "la buena química del hermano mayor"; pero tal vez fuera más exacto decir que se trata de desempeñar la función de mayordomo en unas provincias centroamericanas del sur, subdesarrolladas e incapaces de gobernarse a sí mismas. Esta es una vieja valoración de la política exterior estadounidense para el istmo centroamericano, que, en la actualidad, tiene cierta validez. Los neoliberales han debilitado de tal manera las instituciones estatales que es casi imposible gobernar, en la práctica. Esta falta de gobierno ha dejado a las naciones centroamericanas no a merced de otros estados, sino del gran capital transnacional.

Estas hipótesis no son excluyentes. México asume el papel asignado por Estados Unidos, el cual es aceptado sin titubear por los gobiernos centroamericanos, y al mismo tiempo busca aliviar el impacto del libre comercio con el norte en su economía y la manera de desarrollar y pacificar el sureste de su territorio con vistas a integrarlo al resto de la nación mexicana. Estados Unidos, por su lado, puede intervenir de forma más cómoda y libre, en una región que le preocupa por ser el origen de una corriente imparable de emigrantes, aunque sin asumir la responsabilidad directa sobre la misma. Y a los gobiernos centroamericanos se les proporciona el plan de desarrollo que no han podido elaborar en los últimos años. El meollo del plan es la privatización y la transnacionalización del territorio comprendido entre Puebla y Panamá, lo cual no significa necesariamente que los 38 millones de habitantes saldrán beneficiados. Al menos no mientras no se redistribuya la riqueza y se haga retroceder a la pobreza de manera significativa, según la propuesta de la derecha centroamericana más seria.

En realidad, este proyecto de un corredor ístmico es bastante antiguo. Es un viejo proyecto imperial, el cual ha sido revisado antes de lanzarlo de nuevo. El plan comprende la explotación de los recursos naturales y del trabajo de los habitantes de una vasta región con elevado desempleo. La meta es hacer de ella un polo de desarrollo mundial competitivo, entendiendo por tal subsidiar la inversión del gran capital y proporcionarle fuerza de trabajo barata y disciplinada. El presupuesto es que el capital acudirá atraído por estas ventajas y la promesa de ganancias elevadas. Por su lado, los participantes deberán armonizar su legislación, liberar los mercados, eliminar las restricciones a la competencia y permitir la libre circulación de mercancías, no así de personas, porque de lo que se trata es de contener la presión migratoria sobre la frontera sur de Estados Unidos.

El beneficio que las mayorías salvadoreñas y centroamericanas puedan obtener de este proyecto es secundario; el objetivo primario es el capital y su tasa de retorno. En este contexto, no es dable esperar gran cosa del fortalecimiento institucional. Este es imposible mientras las instituciones estatales no atiendan de manera eficaz las demandas de la población. Tampoco preocupa demasiado el desencanto popular ante una democracia carente de contenido real, en cuanto que no responde a sus necesidades y aspiraciones. Por eso, el plan es esencialmente antidemocrático. Baste pensar que si así lo han decidido sus dirigentes, será impuesto de la misma manera que han impuesto otras decisiones políticas, independientemente del parecer de la población. Para ello cuentan con el poder y la mentira, y la imagen para ocultar la faz descarnada de aquéllos. Y, en último término, siempre tienen a su disposición a la policía y también al ejército.

La derecha salvadoreña cree que con el plan Puebla-Panamá, El Salvador y el istmo al fin habrían sido incluidos en la dinámica de la globalización. Pero hablar de la regionalización del desarrollo en estos términos sería prematuro y no deja de ser atrevido; más apropiado es esperar la profundización del modelo neoliberal como respuesta al subdesarrollo, la pobreza y la violencia social. El resultado se puede anticipar sin temor a equivocarse: más de lo mismo y menos esperanza. Tal como está planteado, el plan no es otra cosa que una escapatoria para no alterar la estructura social que ha permitido una concentración de la riqueza irracional y pecaminosa.

El gobierno de ARENA ha optado por dar la espalda a la realidad, en lugar de enfrentarla; pero ésta no se lo permite y le sale al paso continuamente y lo obliga a negar, a silenciar, a proyectar la imagen falsa y a engañar. Mientras el discurso gubernamental insiste en que El Salvador se encamina con paso seguro hacia el desarrollo y el bienestar, y, por lo tanto, habría razones para el optimismo, la realidad que la mayoría de su población experimenta indica lo contrario, la vida es cada día más difícil. Si los otros insisten en que el proceso se desenvuelve tal como estaba planificado y se

dirige con seguridad al éxito, pero el ciudadano común y corriente no lo experimenta así, éste pronto llega al convencimiento de que quien falla es él. El doble plano, el virtual y el real, conduce a conductas esquizoides y, en último término, a la pasividad. Entonces, la mentira se vuelve más necesaria todavía. Por eso, no hay razones para compartir el optimismo de las clases dominantes salvadoreñas.

San Salvador, 4 de julio de 2001.

